

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Germán RODRÍGUEZ LULE *

Sumario: Introducción; 1. Antecedentes y contexto; 2. Paradigma actual (sin responsabilidad penal stricto sensu); 3. Propuesta; Conclusiones; Fuentes.

Introducción.

Los partidos políticos *son* entidades de interés público, dice la Ley Fundamental, por lo tanto, existen. Cuentan con una forma asociativa que los ubica en el género de las personas morales y pertenecen a los seres ideales o incorpóreos. En tanto ficción jurídica, pueden (es decir, cuentan con la posibilidad de) cometer ilícitos de naturaleza administrativa y penal; acorde a la normativa vigente, los primeros se sancionan, los segundos, no, toda vez que la normativa es omisa sobre el particular.

Hoy la razón para no sancionar penalmente a un partido político, parece ser la importancia que este tiene en el sistema de partidos en el que se basa el régimen político de la democracia y no la imposibilidad legal o doctrinaria de hacerlo¹, pues no hay razón para hacer el distingo: sancionar en el ámbito administrativo y no hacerlo en el penal (en aquel se sanciona al partido y no a la persona, en tanto que en este, a la inversa, es decir, a la persona y no al instituto político). En los hechos, la pena impuesta a los partidos políticos, a la luz de la norma administrativa, impacta prácticamente de la misma forma a como impactaría en el ámbito penal.

El presente documento tiene un doble propósito: por un lado, motivar la reflexión en torno a validez de sancionar penalmente a un partido político, incluso con su pena máxima: la extinción; por otro, demostrar que la imposición de sanciones penales a los partidos políticos resulta eficaz

* Abogado. Profesor de la Universidad Santa Fe (Guanajuato capital, México). Correo de contacto: germanrodriguez32@hotmail.com

¹ Así se infiere de la RESOLUCIÓN [por mayoría de seis votos a favor y cuatro en contra] DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015 Y UT/SCG/Q/CG/111/PEF/126/2015 ACUMULADOS, INICIADO CON MOTIVO DEL ESCRITO PRESENTADO POR SERGIO AGUAYO QUEZADA Y OTROS, ASÍ COMO POR EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL INE/CG301/2015, SOBRE LA PÉRDIDA Y/O CANCELACIÓN DEL REGISTRO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DERIVADO DE SUPUESTAS VIOLACIONES GRAVES, SISTEMÁTICAS Y REITERADAS A LA NORMATIVA ELECTORAL, de 12 de agosto de 2015.

para mejorar la democracia, el sistema de partidos y la credibilidad de la sociedad en ellos, al inhibir conductas indebidas.

Cobran relevancia los argumentos a plantearse, pues se actualizan las siguientes situaciones fácticas y jurídicas: la sofisticación electoral imperante hoy; el dinamismo en la formulación de criterios electorales, ya vía administrativa (a través del Instituto Nacional Electoral) ya vía judicial (a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación); la importancia de la nueva concepción de la jurisdicción contenciosa electoral, la cual tiene como fundamento el predominio de los principios sobre las normas; el nuevo paradigma del derecho penal que establece que las personas morales son susceptibles de sanción penal allende de que materialmente cometan un delito o no.

La presente ponencia se integra de los siguientes apartados: paradigma actual, en donde se señala cuál es la postura legal y jurisprudencial sobre el tema; propuesta, en donde se justifica la conveniencia de incorporar al marco normativo la responsabilidad penal a los partidos políticos; finalmente, las conclusiones y las fuentes.

1.- Antecedentes y contexto.

Es de señalarse que en los procesos electorales intervienen varias personas, físicas y morales, privadas y públicas, nacionales e internacionales, quienes pueden desplegar una amplia gama de conductas: lícitas o ilícitas, típicas o atípicas, legales o ilegales, morales o inmorales. Si se ejecuta una conducta ilícita, ilegal o inmoral, habrá consecuencias, en el caso de la segunda, consecuencias jurídicas dependiendo de la ilegalidad, es decir, la sanción correspondiente puede ser de naturaleza administrativa o penal.

La sociedad es dinámica y el Derecho en tanto instrumento creado por el hombre para dar viabilidad a la vida en colectividad, también. Es por ello que la normativa se actualiza en sintonía con la transformación del conglomerado social, aunque no necesariamente a la misma velocidad o la requerida.

Los desafíos jurídicos derivados de los avances tecnológicos y la desinformación o mal información ciudadanas son mayúsculos. Se plantea en el escenario actual, a guisa de ejemplo, interrogantes como la siguiente: ¿Es jurídicamente válido acusar y sancionar a una persona moral por negarse a proporcionar datos personales de sus clientes en una averiguación criminal? El

ejemplo es actual, basta ver lo ocurrido en los Estados Unidos con una empresa telefónica, quien se niega a dar información de sus clientes a la agencia investigadora, arguyendo la salvaguarda a la privacidad e intimidad del cliente; el Estado, en cambio, argumenta la seguridad nacional a efecto de obtener la información de mérito.

En caso afirmativo, ¿cómo se sanciona? ¿Se disolverá? ¿Se aplicarían las sanciones que prevé la normativa en comento? Los cuestionamientos los formulo en la inteligencia de que se trata de una empresa (persona moral) que tiene un patrimonio mayor al que pudiera registrar algún estado (entidad pública).

Así, resurge el debate en torno a la supremacía entre lo público y lo privado, en donde el paradigma de *ponderación de derechos* es fundamental para resolver controversias de carácter judicial; y para complejizar la situación problemática se encuentra el partido político, forma asociativa que fusiona lo público con lo privado, atento a su definición constitucional (artículo 41, fracción I: «Los partidos políticos son entidades de interés público; [...]»).

En su origen, un partido político es una organización de carácter privado, pues nace con la voluntad de miles de particulares; acorde a lo previsto por el artículo 10, numeral 2, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos: (i) tres mil en por lo menos veinte entidades federativas o (ii) trescientos en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales. Sin embargo, por su finalidad y por su forma de operar, se trata de una organización de carácter público, toda vez que se constituye para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organización de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público (artículo 41, fracción I, párrafo segundo, constitucional); para lograrlo, recibe dinero del erario, denominado *financiamiento público* (artículo 41, fracción II, constitucional).

Así las cosas, la finalidad del partido político es pública, pues no busca satisfacer sólo sus propios fines en tanto forma asociativa de particulares, luego, el bien jurídico tutelado bajo la óptica del derecho penal es la función pública comicial, por tanto, es público. Además, los partidos políticos, al ser la esencia del sistema de partidos, y esta la base de la democracia, entonces persiguen un fin superior. (Y el fin define la construcción de una persona moral -sindicato, asociación civil, sociedad anónima, sociedad civil, por citar algunas-).

En ese orden de ideas, existen diversos criterios para determinar su naturaleza jurídica: el dinero del erario que recibe, la función, la finalidad, su rol central en el sistema democrático. No

obstante, hay consenso en que deben estar bajo el escrutinio de instituciones públicas y es a ellas a quien deben rendir cuentas de manera directa y formal.

Lo cierto es que la exclusión de responsabilidad penal de los partidos políticos puede abonar al incremento de la corrupción de prominentes actores políticos, al no inhibir estas prácticas que hacen daño a la democracia y al sistema de partidos, lo cual se erige como el origen de situaciones indeseables para el Estado, pues influyen en el (des) ánimo social, en la (des) composición de estructuras sociales, en el debilitamiento del Estado, sus instituciones y su régimen jurídico; la inclusión, en cambio, puede tratarse de una medida drástica pero eficaz a problemas drásticos. A grandes males, grandes remedios, dice la *vox populi* (y *vox populi, vox dei*).

Igual efecto pernicioso se produce cuando existiendo la posibilidad legal de sancionar a un partido político, con independencia de la vía o la naturaleza jurídica de la sanción, no hay voluntad de la autoridad para hacerlo o el argumento para justificar su decisión es débil, falaz y más proteccionista del instituto político que del respeto al régimen democrático, que lleva de suyo el respeto al estado de derecho.

En ese orden de ideas, los bienes jurídicos tutelados por el Derecho Penal acorde al novedoso paradigma, se actualizan; las sanciones aumentan o disminuyen; y la categoría de *presunto responsable* de la comisión de un delito, se ensancha.

2. Paradigma actual (sin responsabilidad penal *stricto sensu*).

¿Es válido sancionar penalmente a un partido político? Cobra relevancia la pregunta planteada, si se considera que estos tienen una desaprobación social generalizada (al menos eso es lo que demuestran los estudios demoscópicos realizados hace una década -en números redondos- tanto por sujetos privados como por entes gubernamentales; y la tendencia sigue a la baja.

Además de que la sanción penal pretende inhibir la comisión de conductas que dañen los bienes socialmente relevantes, en la especie, el régimen democrático, la transmisión de titulares del poder público, la correcta aplicación de recursos públicos y la función comicial, en general.

Hoy el paradigma de adecuación de tipos penales y su consecuente sanción en el ámbito comicial, recae única y exclusivamente en personas físicas, paradigma liberal extraído de la Revolución Francesa (1789), de donde se originó el principio general de derecho *societs delinquere non potest*, es decir, exclusión punitiva de las personas morales.

El criterio aludido en el párrafo que antecede fue adoptado de manera relativamente reciente (en 1995) incluso hasta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de manera ilustrativa transcribo la tesis número VI.2o.28 P, de la Novena Época, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 204084, de octubre de 1995.

«PERSONAS MORALES, RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS REPRESENTANTES DE LAS. No puede admitirse que carezcan de responsabilidad quienes actúan a nombre de las personas morales, pues de aceptarse tal argumento los delitos que llegaran a cometer los sujetos que ocupan los puestos de los diversos órganos de las personas morales, quedarían impunes, ya **que las sanciones deberían ser para la persona moral, lo cual es un absurdo lógica y jurídicamente hablando, pues las personas morales carecen de voluntad propia y no es sino a través de las personas físicas como actúan.** Es por esto que los directores, gerentes, administradores y demás representantes de las sociedades, responden en lo personal de los hechos delictuosos que cometan en nombre propio o bajo el amparo de la representación corporativa.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 422/95. Melchor Monterrosas Hernández. 20 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.».

Énfasis añadido.

Sin embargo, como se ha expuesto, el paradigma ha ido modificándose paulatinamente (sobre todo en el ámbito electoral) pues hoy es viable sancionar administrativamente a una persona moral de las denominadas «partidos políticos», mediante la imposición de alguna sanción. Luego, el primer paso se ha dado, pues sancionar en el ámbito administrativo aplicando principios de derecho penal, puedo entenderlo como un «derecho penal suave».

3. Propuesta.

El 5 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, vigente en toda la república a partir del 18 de junio de 2016; en su Libro Segundo (Del Procedimiento), Capítulo X (Procedimientos Especiales), Capítulo II (Procedimiento para personas jurídicas), establece el deber jurídico de una persona moral de

responder por la comisión de un delito cometido bajo su amparo y en beneficio propio o de un tercero con quien tenga interés (lo cual recae en la hipótesis del beneficio propio).

Con lo anterior se inaugura el nuevo paradigma del derecho penal, toda vez que se establece que las personas morales son susceptibles de sanción penal allende de que materialmente cometan un delito o no. Por tanto, la realidad cambió y ha dado un vuelco la normativa penal, cuyos bienes jurídicos tutelados se actualizan; las sanciones aumentan o disminuyen; y la categoría de *presunto responsable* de la comisión de un delito, se ensancha.

Si bien es cierto, debe tomarse en consideración el principio de especialidad para la aplicación de las normas electorales (*Mandatum speciale derogat generali*), también lo es que debe considerarse la creciente inconformidad de la ciudadanía apartidista ante la actuación deficiente -por decir lo menos- de algunos militantes o representantes distinguidos de los partidos políticos.

En el epicentro de la problemática se encuentra el dinero de los contribuyentes, cuyas aportaciones -en alguna medida- se dirigen a sufragar los gastos de los partidos políticos, cuyas prerrogativas son criticables por excesivas, sobre todo contrastándolas con el quehacer cotidiano de los partidos políticos y el beneficio concreto que la población observa, el cual es prácticamente nulo.

Sancionar penalmente a los partidos políticos puede ser una medida eficaz que inhiba prácticas que se aparten de su finalidad y, en consecuencia, contribuya a acercarse a esta, por lo que resulta conveniente y oportuno repensar y redefinir los tipos penales electorales y los sujetos de derecho penal electoral, analizando la conveniencia de incorporarlos a este régimen legal.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales, cuyo objeto es establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno, si bien establece algunas conductas típicas y antijurídicas, con sus respectivas sanciones, susceptibles de ser cometidas por funcionarios electorales, funcionarios partidistas o candidatos, servidores públicos y ministros de culto (artículos 8, 9, 11 y 16, respectivamente), también establece los tipos penales y sus respectivas sanciones de manera genérica, es decir, sin el requisito de colmar cualidad alguna. Sin embargo, y aunque no se establece expresa y categóricamente, se colige que estas se dirigen única y exclusivamente a personas físicas (artículos 7, 10, 12, 13 y 19), en razón de que se establecen dos tipos de sanciones, una pecuniaria y otra privativa de libertad. La conjunción copulativa «y» hace imposible que estos tipos penales sean

dirigidos a los partidos políticos, pues estos no son susceptibles de ser sancionados con esta última pena, la privativa de libertad (al menos de la libertad corporal, pues podría entenderse la libertad de actuar, misma que sería restringida).

Hoy, una persona moral puede ser responsable de la comisión de un delito, cuestión impensable hace una década.

La realidad cambió y ha dado un vuelco la normativa penal con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales ya referenciado.

La nueva normativa obedece, en buena medida a la globalización del derecho penal y a la actualización del fenómeno de la delincuencia organizada transnacional, misma que ha sido infiltrada en la actividad partidista, lo cual constituyen su fuente real o material.

Es de señalarse que una persona moral no puede ser la única responsable de la comisión de un delito, pues esta es *codemandada*, es decir, responderá en adición -de manera solidaria o subsidiaria, es decir, indirecta- a una persona física, ya sea su trabajador, ya su representante legal, ya alguna otra persona en el caso de los partidos políticos.

¿Tiene lógica? ¿Cuál es su *ratio legis*? Lo anterior, en la inteligencia de que el Estado (por ejemplo) puede ser demandado, vía responsabilidad patrimonial del Estado, a efecto de recuperar el monto por los daños causados a un particular gobernado, institución jurídica tomada del derecho civil. Lo mismo ocurre con las personas morales del derecho privado: basta hacer un breve estudio comparado y definir las instituciones jurídicas de responsabilidad solidaria y hechos ilícitos, entendiendo por la primera, una acción ilícita, al margen de la norma, y por la segunda, la posibilidad legal (*lato sensu*) de exigir a varios deudores, a cada uno de por sí, el cumplimiento total de una obligación.²

En ese orden de ideas, *a priori* se cuestionaría la pertinencia de denunciar a una persona moral cuando es una persona física quien debería pagar por la comisión de un delito, bajo el argumento de que uno de los objetivos de las sanciones del derecho penal, es reinserter al delincuente a la vida social, luego de un proceso de readaptación, el cual lo llevará -en términos generales y atendiendo a su máxima sanción por la gravedad de la falta- desde la prisión. ¿Cómo reinserter a la sociedad una persona moral? Sin embargo, también resulta viable la reinserción de un partido político al cause de la legalidad y el respeto a la normativa, aunque por su naturaleza no sea susceptible de prisión.

² Artículo 1475 del Código Civil para el Estado de Guanajuato.

Además, el paradigma descrito ha sido superado con la inserción de las medidas alternas, en tanto instrumento para reparar un daño, a la luz de la justicia restaurativa, pues el objetivo central es que se repare el daño causado y no se vuelva a delinquir, en ello radica las características de la sanción como pena, en su corrección para el infractor y en su ejemplificación para con los demás.

En efecto, la justicia restaurativa lleva de suyo la idea de punición al responsable de la comisión de un delito, ya sea vía restitución, pago, trabajo comunitario o una simple disculpa pública, como lo establece la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica.

En ese orden de ideas, una cuantiosa sanción económica, la imposibilidad de seguir percibiendo prerrogativas, la suspensión de actividades o la extinción de un partido político, se erigen en fuente que motiva el cumplimiento del objetivo de la sanción penal, cuidando en todo que esta sea racional a efecto de evitar daños mayores, pues cancelar el registro de un partido político y su consecuente extinción lleva de suyo la idea de despidos masivos y, en consecuencia, puede devenir en problemas sociales de mayores dimensiones. ¿Qué culpa tienen los trabajadores comunes? ¿Qué los electores? ¿Qué la ciudadanía en general? Ellos, indirectamente resentirían la sanción que, en principio, debe ser para las personas morales delincuentes, por lo que se transgredería -o al menos, se cuestiona- el principio de *intrascendencia de la pena*.

Lo anterior, partiendo de la idea de que a la luz de la teoría de la pena, esta tiene las siguientes características³: intimidatoria, aflictiva, ejemplar, legal correctiva y justa; asimismo, tiene los siguientes fines: de corrección, de protección, de intimidación y ejemplificativa.⁴

Ahora bien, en el derecho comparado, se advierte que se sostiene la responsabilidad penal de las personas morales, en atención a lo siguiente⁵:

- En Estados Unidos, se sostiene que una persona puede ser responsable por los actos u omisiones de otro; lo que depende de la posición y de las funciones que tiene una persona en una empresa.

³ AMUCHATEGUI Requena, I. Griselda, *Derecho penal*, 3ª ed., Oxford, México, 2005.

⁴ *Idem*.

⁵ Cfr. MORENO HERNÁNDEZ, Moisés, *Responsabilidad de las personas jurídicas y sus consecuencias*, consultado el 23 de febrero de 2016 y tomado de http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwlu7XVul_LAhVqv4MKHReKCDEQFggrMAM&url=http%3A%2F%2Fbiblio.juridicas.unam.mx%2Flibros%2F2%2F997%2F17.pdf&usg=AFQjCNHKTz-wx8ElTuhZ25aBpmn2DeVeQ

- En Inglaterra, se vincula sólo a los dirigentes y no a trabajadores operativos o menores.
- En Alemania, se visualiza un sistema cerrado en el que se permite la sanción autónoma a personas morales y de manera accesorio, a sus trabajadores (personas físicas).
- En Holanda, se acepta la *teoría de la responsabilidad funcional*, es decir, un jefe puede responder por las conductas de sus empleados⁶; no se trata de una responsabilidad puramente objetiva sino que actualiza un aspecto moral o material. Además, siempre deberá estudiarse la responsabilidad de las personas físicas.

En Guanajuato, el Código Penal (artículo 94) establece las consecuencias jurídicas que pueden tener las personas morales (excluyendo a las públicas y a los partidos políticos) cuando se actualice la comisión de un delito, acotándola a cuatro: prohibición de realizar determinadas operaciones, intervención, suspensión y extinción.

Cobra relevancia la limitación que la porción normativa de referencia impone, pues al hablar de personas morales, las restringe a las de carácter privado, acotación de la cual se derivan dos verdades:

- Las personas morales de derecho público (entidad federativa, municipios, ya sea Administración Pública centralizada o descentralizada) no son susceptibles de ser sancionadas penalmente *stricto sensu*, es decir, en la vía estrictamente penal.
- A la luz del principio lógico de exclusión, todas aquellas personas morales que no pertenecen al derecho público, son susceptibles de ser sancionadas penalmente.

No obstante los corolarios anteriores, resulta necesario hacer una nueva consideración en torno al ámbito privado del derecho, a efecto de determinar sus alcances, pues acorde a lo expuesto, sería discutible si se sanciona penalmente a los partidos políticos, sindicatos, asociaciones religiosas o alguna otra persona moral de la amplia gama que prevé el sistema jurídico mexicano.

Es importante señalar que las consecuencias penales para las personas morales no son de carácter estrictamente penal, sino administrativo.

Incorporar a la ley la propuesta de que los partidos políticos sean sujetos de responsabilidad penal, en realidad no es del todo novedosa; el Legislador (y las diversas fuerzas políticas en él representadas) no se verían del todo vanguardistas, intrépidos, audaces o hasta temerarios, pues la ley ya prevé sanciones -sólo que estas de carácter administrativo- por transgredir la ley, al

⁶ Principio de Administración: la autoridad se delega, pero la responsabilidad se comparte.

establecer multas, las cuales impactan en su pecunio, y hasta pérdida de registro por realizar conductas graves y sistemáticas. Con la idea que se propone, entonces, lo que haría el Legislador sería ampliar los supuestos de sanción, lo cual pudiera hacerse en la ley penal, así como ensanchar el catálogo de sanciones, debiendo haber relación y asequibilidad entre ambos. Lo anterior es así, pues ya se sanciona a los partidos políticos en la vía administrativa mediante el procedimiento disciplinario sancionador, ya sea el ordinario, ya el especial. Las sanciones se prevén en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los siguientes términos:

«Artículo 456. [...]

I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley, y

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

[...].».

En ese orden de ideas, los procedimientos disciplinarios sancionadores tutelan el deber de un operador político que tiene para con la autoridad: INE, partidos políticos, por contravenir normas electorales administrativas; simultáneamente, el bien jurídico tutelado en ambos ámbitos (el administrativo y el penal) es el propio entorno social, la sana convivencia colectiva, el sistema de partidos y el régimen democrático mismo. Ambos son similares porque hay penas, hay sanciones.

No obstante, con independencia de la vía en que se sancione (ya sea administrativa, ya penal), lo relevante se encuentra en la eficacia de la sanción, que debe traducirse en inhibir conductas indeseables entre los actores políticos.

Por tanto, se propone adicionar al catálogo de sanciones: la suspensión de derechos y prerrogativas, la disculpa pública, la extensión (se haría extensivo a sus integrantes: recordar que el partido político se trata de una consecuencia, ficticia o no, de la voluntad de muchas personas físicas, quienes en muchas ocasiones se encuentran desvinculadas con la burocracia partidista que es quien toma decisiones no siempre consultando a las bases).

Reformar la ley en los términos propuestos complementaría el Sistema Nacional Anticorrupción, nacido con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, y de parte de sus leyes secundarias, publicadas en el mismo instrumento oficial el 18 de julio de 2016, y contribuiría a su eficacia, pues se atenderían las dos grandes esferas del Poder público: antes de ejercerlo (con partidos políticos y en el ámbito electoral) y durante su ejercicio (en la Administración Pública).

Se propone, en síntesis, la creación de sanciones cuya implementación sea gradual acorde, desde luego, al tipo de ilícito cometido, reincidencia, gravedad y otras circunstancias particulares de cada caso. A guisa de ejemplo, se citan los siguientes: el Partido Verde Ecologista de México en el proceso electoral federal pasado, la negligencia de Movimiento Ciudadano al poner en riesgo los datos personales de millones de mexicanos, el Partido Socialdemócrata morelense al suscribir un contrato para que alguien sea su candidato (presuntamente comercializando con los valores más altos que debe tener un ciudadano o, francamente, simulando y un lamentable etcétera). Deberá razonarse, argumentarse y justificarse la sanción impuesta en cada caso.

Conclusión.

Hoy la razón para no sancionar penalmente a un partido político, parece ser la importancia que este tiene en el sistema de partidos en el que se basa el régimen político de la democracia y no la imposibilidad jurídica de castigar a una persona moral, como se consideraba recientemente, pues elaborando un argumento *simili*, no hay razón para sancionar en el ámbito administrativo y no penal, pues en aquel se sanciona al partido y no a la persona, en tanto que en este, a la inversa, es

decir, a la persona y no al instituto político, aun y cuando los efectos, *de facto*, son semejantes o iguales.

Sin embargo, acorde a lo expuesto y argumentado, el *quid* de la sanción consiste en proteger bienes (*lato sensu*) públicos jurídicamente tutelados, constitucionalmente categorizados como principios del Estado mexicano: el sistema democrático, el régimen de partidos políticos, la civilidad en la competencia electoral, el vínculo de los tributos al gasto público, el derecho ciudadano a la buena Administración Pública, entre otros.

Luego, lo relevante de la sanción, con independencia de su naturaleza, ya sea administrativa o penal, consiste en que se cumpla con su *telos*, es decir, que inhiba conductas indebidas de los partidos políticos y sus simpatizantes, militantes o dirigentes, protegiendo con esto a la ciudadanía en general y a los recursos por ella aportada -vía tributos- para el sostenimiento del Estado y sus instituciones. Sin embargo, la sanción penal pudiera tener más impacto para estos propósitos que la administrativa.

En todo caso, resulta indispensable que al sancionar a un partido político se ponderen dos criterios, el de racionalidad y el de la democracia, este último que lleva de suyo el de partidos, bajo la premisa de que resultan más importantes los ciudadanos que los partidos políticos, pues estos son consecuencia de la voluntad y financiamiento de aquellos.

Fuentes.

- AMUCHATEGUI Requena, I. Griselda, *Derecho penal*, 3ª ed., Oxford, México, 2005.
- Código Civil para el Estado de Guanajuato.
- Código Penal para el Estado de Guanajuato.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- HERRERA TORRES, Javier, *Delincuencia económica: la responsabilidad penal de las personas jurídicas*, consultado el 23 de febrero de 2016 y tomado de https://www.google.com.mx/?gfe_rd=cr&ei=UyHNVvH1E6rI8gea2DU&gws_rd=ssl#q=responsabilidad+penal+de+las+personas+morales
- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
- Ley General de Partidos Políticos.
- Ley General en Materia de Delitos Electorales.

- Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica.
- MORENO HERNÁNDEZ, Moisés, *Responsabilidad de las personas jurídicas y sus consecuencias*, consultado el 23 de febrero de 2016 y tomado de http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKewilu7XVuI_LAhVqv4MKHReKCDEQFggrMAM&url=http%3A%2F%2Fbiblio.juridicas.unam.mx%2Flibros%2F2%2F997%2F17.pdf&usg=AFQjCNHKTz-wx8ElTuhZ25aBpmn2DeVeQ
- http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKewilu7XVuI_LAhVqv4MKHReKCDEQFggrMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.juridicas.unam.mx%2Fpublica%2Flibrev%2Frev%2Ffindercom%2Fcont%2F30%2Fdtr%2Fdtr2.pdf&usg=AFQjCNF7Igi2tLlkCNTN3-4NMGNpD9wqmg Consultado el 23 de febrero de 2016.
- RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015 Y UT/SCG/Q/CG/111/PEF/126/2015 ACUMULADOS, INICIADO CON MOTIVO DEL ESCRITO PRESENTADO POR SERGIO AGUAYO QUEZADA Y OTROS, ASÍ COMO POR EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL INE/CG301/2015, SOBRE LA PÉRDIDA Y/O CANCELACIÓN DEL REGISTRO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DERIVADO DE SUPUESTAS VIOLACIONES GRAVES, SISTEMÁTICAS Y REITERADAS A LA NORMATIVA ELECTORAL, de 12 de agosto de 2015.